

Tinta Roja Nº18 - Primavera de 2012 ***Órgano del expresión de los CJC***

Mario Baltanas

Desde el inicio del actual curso académico hemos podido vislumbrar cómo se han ido sucediendo una tras otra huelgas y movilizaciones de los docentes y del estudiantado en los institutos de secundaria, formación profesional y bachillerato, para defender la educación pública contra los planes de los gobiernos regionales y del gobierno central siguiendo los intereses de la oligarquía capitalista.

Estos recortes constituyen ataques frontales contra la educación pública y los derechos educativos de los hijos de la clase obrera y de los sectores populares, y se enmarcan en las necesidades actuales del capitalismo en crisis, que necesita expandirse a nuevos y potenciales sectores y mercados aún casi sin explotar como la educación o la sanidad.

La apuesta por la educación concertada y privada por parte de los gobiernos regionales y central ha venido siendo clara desde tiempo atrás y pretende marginar, destruir y privatizar la escuela pública, negando el derecho a una educación y segregando a la juventud de extracción obrera.

Sin embargo, en defensa de la enseñanza pública ni la juventud obrera y estudiante, ni el profesorado, se han quedado quietos o en una actitud dubitativa, sino que las luchas se han hecho sentir, y así ha de seguir.

Las movilizaciones se han mantenido en las regiones donde los recortes han sido más duros, con la excusa del “ahorro” y la “austeridad”, como ha sido el caso de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Navarra.

No obstante, en la mayoría de comunidades autónomas las medidas han sido similares:

aumento de horas lectivas al profesorado y despido de personal interino. Es especialmente sangrante el caso de Madrid, con 3.000 interinos en el paro. En el conjunto del Estado, un 70% de las plazas no se ha ofertado en las oposiciones. Esta disminución del profesorado provoca una mayor masificación en las aulas y por consiguiente un peor trabajo y capacidad de impartir las clases, la eliminación de las tutorías, disminución de asignatura optativas, desaparición de los desdobles de inglés o de los laboratorios de ciencias y una menor atención a los alumnos con dificultades.

Toda esta serie de recortes y privatizaciones encubiertas, con la intención de destruir la educación pública, vienen reforzadas por una legislación que permite y anima todo este conjunto de medidas. Los recortes vienen desde largo tiempo, ahora con la excusa de la crisis se radicalizan, mostrándonos la verdadera cara del capitalismo, que carga, como siempre, contra la clase obrera.

Esta privatización encubierta se lleva a cabo de diversas formas, además de mediante recortes y estrangulamiento del presupuesto. Se segrega al alumnado inmigrante y más humilde a centros públicos, mientras se promocionan centros concertados; se externalizan servicios en los centros públicos –como la limpieza, los comedores y actividades extraescolares–, que se dejan en manos de empresas privadas afines a los gobiernos autonómicos; se recalifican terrenos públicos y se ceden a empresas para que construyan centros privados o concertados. A los/as directores/as se les trata como meros asesores, como en el caso de la comunidad de Madrid, en el que se paga en la educación primaria 0,50 céntimos más a los/as directores/as por cada alumno extra inscrito en el centro a partir de un mínimo.

En la misma línea, se continúa con la destrucción de la FP gracias a las últimas reformas, cuya gestión se deja en muchos aspectos en manos de empresas privadas y de la patronal, mientras se lanza a estos estudiantes como mera carne de cañón a empresas que reclaman fuerza de trabajo gratuita o prácticamente gratuita, y sin derechos, por supuesto. Por otra parte, se niegan ayudas y recursos al alumnado en situación desfavorable, lo que desemboca en el abandono de los estudios y su conversión en presas fáciles para el capital ávido de trabajadores en mala situación.

Tras la entrada al gobierno del PP, contando con la complicidad del gobierno del PSOE que le precedió, se han planteado y aprobado las nuevas medidas en educación que ya se habían anunciado previamente a las elecciones generales. José Ignacio Wert, el nuevo Ministro de Educación, Cultura y Deporte, anunció modificaciones en bachillerato, que pasará a ser de 3 años, eliminando un año de la ESO.

Pero el dato más desesperanzador es la nueva propuesta para FP, que va a terminar de convertir a ésta en una mera suministradora de mano de obra barata para las empresas, combinando la formación-trabajo, sin que este último vaya a estar dignamente retribuido o con las mínimas condiciones laborales para los/as jóvenes que lo realicen.

Por último, y no menos importante, la ideología del sistema seguirá transmitiéndose, no ya en la asignatura “Educación para la ciudadanía” del PSOE, sino en la asignatura rebautizada “Educación Cívica y Constitucional”, la misma manipulación pero con mayores tintes conservadores, monárquicos y cristianos.

La lucha por una educación universal es una necesidad imperiosa de los estudiantes y la clase obrera. Solo bajo el socialismo será posible una educación científica, laica, gratuita y de calidad, por lo que es de vital importancia que nos organicemos, en torno a la juventud comunista, en defensa de la educación pública.